bservatorio Exterior

CESCE

Mayo 2016

COLOMBIA

La santificación colombiana

El presidente Santos ha hecho de la pacificación del país el eje de su mandato: se trata de una apuesta fuerte, que si gana cambiará la historia de Colombia, pero si pierde podría dejar su carrera política muy tocada.

El pasado 23 de marzo se cumplía el plazo que el presidente Santos había establecido para firmar el acuerdo de paz con las FARC. Tras 60 años de conflicto, parecía que la paz estaba más cerca que nunca. Sin embargo, ambos bandos dejaron pasar una muy buena oportunidad para declarar América Latina como zona libre de conflictos armados.
Eso no significa que el acuerdo no sea posible, más bien al contrario, desde el inicio de los Diálogos de Paz en La Habana en 2012, los equipos negociadores han conseguido ponerse de acuerdo en distintos puntos críticos, como la política agraria, la integración de los guerrilleros en la vida política, la lucha contra el narcotráfico y el sometimiento a la justicia. No obstante, ha sido la fecha de abandono de las armas lo que ha provocado este desenlace. El presidente Santos se negó a firmar la paz sin que antes los representantes de las FARC estableciesen una fecha exacta para el desarme.

De acuerdo con lo que dicen todos los analistas e incluso el propio presidente colombiano, parece que la paz es un camino irreversible. Sin embargo, el principal reto ahora reside en llevar los acuerdos de Cuba a la realidad colombiana. La herida social es profunda, las víctimas se cuentan por miles y los desplazados por millones. Es necesario, por tanto, no sólo que las autoridades lleguen a un acuerdo con los guerrilleros, sino que sea la castigada sociedad colombiana la que refrende el mismo.

Es en este punto donde se encuentra uno de los escollos en el camino hacia la paz. Algunas personalidades del país, como por ejemplo el expresidente Álvaro Uribe, opinan que el equipo negociador del Gobierno está siendo demasiado benévolo con los guerrilleros. La sociedad no quiere que los culpables (tanto del bando guerrillero como del ejército) queden impunes y las penas que se han establecido en los acuerdos bajo el denominado sistema de justicia transicional (entre 5 y 8 años de cárcel para los guerrilleros que reconozcan sus faltas y se comprometan a resarcir a las víctimas) les parecen demasiado laxas para la magnitud de los crímenes. Incluso organizaciones

como Amnistía Internacional han advertido de que las sanciones no son proporcionales a la gravedad de las acciones.

Otro de los problemas a los que se enfrenta Colombia es el de la reinserción de los miembros de las FARC en la sociedad y en la clase política. Aunque se ponga fin a los conflictos entre el Gobierno y los distintos grupos armados (a finales del mes de marzo se iniciaron conversaciones con el segundo grupo armado más importante en Colombia, el ELN), es necesario trabajar con los antiguos guerrilleros para que no acaben formando parte de bandas criminales, las denominadas bacrim, que controlan las redes de narcotráfico en las zonas rurales de más difícil acceso.

Para contribuir a esta reinserción, se debe fortalecer la presencia del Estado en aquellas regiones que han sido controladas por las FARC durante todos estos años. Es cierto que la situación ha mejorado mucho con respecto a finales de los años 90, cuando se firmó el Plan Colombia con Estados Unidos. Las instituciones son más sólidas, la seguridad ha mejorado, el ejército cuenta con mejores dotaciones y las tasas de homicidios y secuestros se han reducido un 50% y un 90%, respectivamente.

Sin embargo, dada la coyuntura económica actual, con el precio del petróleo en mínimos históricos y con reiterados déficits fiscales en las cuentas públicas, se hace patente que Colombia necesita ayuda para mejorar sus infraestructuras. De este modo, la integración del territorio nacional será mucho más efectiva y rápida, y es la mejor vía para extender la presencia del Estado.

Con este objetivo, el pasado mes de febrero, Barack Obama y Manuel Santos acordaron los términos de un nuevo plan de asistencia llamado Paz Colombia, una especie de “Plan Marshall” por el cual Estados Unidos desembolsará 450 M$ en concepto de ayuda bilateral para el restablecimiento de la paz, la lucha contra el narcotráfico, apoyo para la expansión de las instituciones y la promoción de la justicia y los servicios esenciales para las víctimas.

Así pues, a falta de llegar a un acuerdo sobre la fecha del desarme de la guerrilla, parece que finalmente se pondrá fin al conflicto violento más duradero que ha vivido Latinoamérica. Sin embargo, la tan ansiada paz puede verse amenazada: primero, porque debe venir acompañada de un proyecto eficaz de reinserción de los guerrilleros, algo que depende de la gestión del propio gobierno; y segundo, por el rechazo que parte de la sociedad colombiana está manifestando hacia la impunidad que el acuerdo ofrece a los criminales. Sólo queda esperar al transcurso del tiempo para ver cuál será el desenlace.